



**AMPARO EN REVISION 250/96**  
**QUEJOSO: EDGAR IVAN COLINA RAMIREZ.**

**MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GUITRON.**  
**SECRETARIO: HUMBERTO SUAREZ CAMACHO.**

Vo. Bo. *[Firma]*

México, Distrito Federal, Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día cuatro de marzo de mil novecientos noventa y siete.

**VISTOS; Y**  
**RESULTANDO:**

**PRIMERO.-** Mediante escrito presentado el doce de junio de mil novecientos noventa y cinco, Edgar Iván Colina Ramírez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se mencionan:

*[Firma]*  
Cotejó:

- "1.- General Secretario de la Defensa Nacional (Titular de la Secretaría de la Defensa Nacional).-- 2.- Director General de Educación Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional.--- 3.- Subdirector de Educación Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional.--- 4.- Director del Heroico Colegio Militar.--- 5.- Director General de Banjercito.--- Actos reclamados:--- Los siguientes actos se reclaman indistintamente de

*todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables en el punto que antecede.---*

- 1.- La orden (sic) para girar órdenes de baja del Heroico Colegio Militar y del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, contenida en el oficio número SA-2779, de fecha 23 de mayo de 1995.---*
  - 2.- La orden de baja del Heroico Colegio Militar y del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, contenido en el oficio número SA-2849 de fecha 26 de mayo de 1995.---*
  - 3.- El Acuerdo del General Secretario de la Defensa Nacional, mediante el cual el quejoso causa baja del Heroico Colegio Militar y del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y al cual se hace referencia en el oficio número SA-2849 de fecha 26 de mayo de 1995.---*
  - 4.- La determinación o resolución dictada el día 22 de mayo de 1995, por el Consejo de Honor del Heroico Colegio Militar.---*
  - 5.- La orden para hacer efectiva a favor del Erario Nacional, la fianza otorgada por el quejoso, para garantizar su estancia en el Heroico Colegio Militar.---*
- AMPARO CONTRA LEYES.---* Se señalan como autoridades responsables:---
- 1.- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.--*
  - 2.- Honorable Congreso de la Unión.---* Se señalan como actos reclamados los siguientes:---
- a) El artículo 170 fracción II, apartado D, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.---*
  - b) El Reglamento Interior del Heroico Colegio Militar.---*
  - c) El Reglamento para la Organización y*



88  
85

*Funcionamiento de los Consejos de Honor del Ejército".*

**SEGUNDO.-** El quejoso precisó como preceptos violados los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; señaló que no existe tercero perjudicado, y como antecedentes de su demanda expuso:

"1.- El suscrito causó alta en el Ejército como Cadete del Heroico Colegio Militar, en el mes de septiembre de 1992, tiempo durante el cual desarrolló sus estudios de Educación Militar, con la mejor dedicación y respetando siempre las normas internas de la Institución Castrense.--- 2.- Es el caso que el día 22 de mayo de 1995, el quejoso fue sometido injustamente a un Consejo de Honor por imputársele faltas muy graves contra el honor y decoro militar, las cuales nunca cometió el promovente.--- 3.- En virtud de lo anterior el día 24 de mayo de 1995, mediante el oficio número SA-2779, emitido por el Subdirector de la Dirección General de Educación Militar, SE ME COMUNICO QUE SE GIRARIAN ORDENES DE BAJA DEL HEROICO COLEGIO MILITAR Y DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS POR HABER OBSERVADO MALA CONDUCTA, ostentando dicho oficio fecha del día 23 de mayo del año en curso, y emitido en contra del hoy quejoso, comunicándose además que se le

SECRETARÍA DE  
DEFENSA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

concedían quince días para manifestar lo que a sus intereses convinieran.--- 4.- Posteriormente el día 26 de mayo de 1995, mediante el oficio número SA-2849 suscrito por el Director General de Educación Militar, se le comunicó al quejoso que por acuerdo del General Secretario de la Defensa Nacional, causaba baja del Heroico Colegio Militar y del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos por haber observado mala conducta determinada por el Consejo de Honor del citado Colegio, en Consejo formado el día 22 de mayo de 1995, al haber acumulado más de 500 puntos de demérito durante el ciclo escolar 1994-1995, debiéndose hacer efectiva a favor del Erario Nacional, la fianza otorgada para garantizar su estancia en el plantel.

-- 5.- No obstante que la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el Reglamento para la Organización y Funcionamiento de los Consejos de Honor en el Ejército, y el Reglamento del Heroico Colegio Militar, no prevén ningún recurso o medio de defensa legal en contra de un Acuerdo de Baja ni de las resoluciones que dicte un Consejo de Honor, mediante escrito fechado el día 2 de junio de 1995, el quejoso promovió un escrito de inconformidad dirigido al General Secretario de la Defensa Nacional General de Educación Militar, y a la primera mesa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Recursos Humanos), haciéndose patente su total inconformidad con la imputación de las faltas graves que nunca se cometieron, y





89  
86

solicitando una reconsiderasen (sic) frente a los acuerdos dictados en su contra, en los que se le comunica en forma primaria que se girarían órdenes de baja en su contra por lo que se le otorgaban quince días para que manifestara lo que a su derecho conviniera, y posteriormente a los tres días de emitido dicho acuerdo se le informó que por acuerdo del General Secretario de la Defensa Nacional causaba baja del Heroico Colegio Militar y del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.---

6.- Cabe resaltar que las órdenes y los acuerdos girados en contra de la demandante de garantías, no provienen de ningún proceso o Autoridad Judicial Militar, por lo que se acude a la presente vía en demanda de amparo, asimismo resulta admisible la presente demanda por que no se encuentra pendiente de resolución ningún recurso o medio de defensa legal en contra de la baja del ejército, ya que el hecho de que el quejoso haya presentado un escrito de inconformidad solicitando la reconsideración de su baja, no implica la existencia de ningún medio de defensa en contra de tal determinación, por que a través de varias ejecutorias de amparo se ha establecido que los recursos o medios de defensa ordinarios deben de estar expresamente previstos en la ley respectiva, y en el caso que nos ocupa no existe expresamente ningún recurso o medio de defensa legal a través del cual se pueda modificar, confirmar o revocar un acuerdo de baja dictado

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
COMITE DE  
DEFENSA  
NACIONAL  
GENERAL DE ACUERDOS

por el General Secretario de la Defensa Nacional proveniente de la calificación de faltas sancionadas por un Consejo de Honor, en tales condiciones conforme a derecho no puede presuponerse que a través del simple escrito de inconformidad presentado por el quejoso se vaya a reconsiderar su baja, por que no existe disposición legal expresa para ello, y la circunstancia de que se haya hecho patente esta inconformidad por escrito solo viene a constituir una ausencia total de consentimiento frente a los actos de autoridad que hoy se reclaman en los presentes términos: ---

"BAJA EN EL EJERCITO, COMPETENCIA DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE, EN AMPARO CONTRA LA. Si el acto reclamado en el amparo consiste en la orden de baja del Ejército Nacional, donde el quejoso prestaba sus servicios, dictada por un comandante de guarnición, a pretexto de cumplimentar una sentencia pronunciada por un juzgado militar, y aparece de esta sentencia pronunciada por un juzgado militar (SIC), quejoso a la pena de destitución del Ejército, debe estimarse que como dicha orden de baja es por su naturaleza un acto administrativo, tanto porque emana de una autoridad de ésta índole, como porque no se dictó en ejecución de una sentencia pronunciada por autoridad judicial, corresponde con fundamento en los artículos 25, fracción I, y 42, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la Segunda Sala



20  
87

de la Suprema Corte conocer de la revisión interpuesta contra la sentencia del Juez de Distrito por ser competente para ello".--- Castillo Magaña Fernando, Pág. 3962. Tomo LXIII, 26 de marzo de 1940. Cuatro Votos.--- Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación. 5A. Epoca.--- (Poder Judicial de la Federación 4o. CD-ROM julio de 1994)."

TERCERO.- La Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, a quien correspondió conocer del juicio, admitió a trámite la demanda y la registró con el número 232/95; señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, previo el trámite respectivo, pronunció sentencia que autorizó el veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, misma que concluye con el siguiente punto resolutivo:

"UNICO.- Se sobresee el presente juicio de garantías.--- Notifíquese; haciéndolo personalmente a la parte quejosa".

Dicha sentencia se sustentó, en las siguientes consideraciones:

"PRIMERO.- La quejosa señaló como autoridad responsable al Director General de Banjército, quien no tiene el carácter de autoridad para los efectos del amparo, toda vez que se trata del funcionario de una sociedad nacional de crédito que no reúne las características necesarias

*para ser considerado como autoridad para los efectos del juicio de amparo, en virtud de que carece de decisión e imperio, que impliquen la afectación de la esfera jurídica de los particulares y que por ende no está en posibilidad material de obrar como individuo que ejerza actos públicos.--- Así las cosas, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el artículo 11 ambos de la Ley de Amparo.--- En consecuencia, procede sobreseer al respecto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo.--- SEGUNDO.- El director del Heroico Colegio Militar, negó los actos que se le reclaman, sin que obre en autos, prueba alguna en contrario.--- Así las cosas, procede sobreseer con fundamento en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, respecto de los actos atribuidos a la autoridad mencionada en el párrafo anterior.--- TERCERO.- El Secretario de la Defensa Nacional, el Director General de Educación Militar y el Subdirector de Educación Militar, aceptaron los actos que se les atribuyen.--- El Secretario de la Defensa Nacional, en nombre del Presidente de la República, aceptó los actos consistentes en la promulgación de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, específicamente por lo que hace al artículo 170, fracción II, apartado D, y el Reglamento Interior para el Heroico Colegio Militar y para la Organización y Funcionamiento de los Consejos de*





91  
88

Honor en el Ejército.--- Los Secretarios de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, aceptaron la discusión y aprobación del artículo 170, fracción II, apartado P, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.--- CUARTO.- Previo al estudio del fondo del presente asunto y por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o de oficio, procede analizarse (sic) las causales de improcedencia.--- En la especie se surte la causal de improcedencia, prevista en el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo.--- En efecto, a fojas ciento dieciséis de autos obra una constancia de fecha veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco, que se acompañó al informe justificado rendido por el Secretario de la Defensa Nacional, en la que se expresa lo siguiente: "RECIBI:- la notificación de la Dirección General de Educación Militar (sección administrativa), en oficio número SA-2779 de fecha 23 de mayo de 1995, del que quedo debidamente enterado de su contenido y manifiesto mi consentimiento para que se me giren órdenes de baja como tal, del Heroico Colegio Militar y del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por haber observado MALA CONDUCTA, determinada por el Consejo de Honor del mencionado plantel, al haber acumulado más de 500 puntos de demérito durante el ciclo escolar 1994-1995."--- Como se ve de la transcripción



CORTE DE  
A FACION  
CIE FUERDOS

anterior, el quejoso consintió expresamente las órdenes de baja del Heroico Colegio Militar y del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas, razón por la cual tales órdenes de baja, no son otra cosa que actos consentidos de manera expresa.--- Así las cosas procede sobreseer al respecto con fundamento en la fracción III del artículo 74, en relación con la fracción XI, del artículo 73, ambos de la Ley de Amparo.--- QUINTO.- Respecto de los actos reclamados al Presidente de la República, y al Congreso de la Unión, consistentes en el artículo 120, fracción II, apartado P, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el Reglamento del Heroico Colegio Militar, y el Reglamento para la Organización y Funcionamiento de los Consejos de Honor en el Ejército, procede sobreseer en lo tocante a dichos actos, toda vez que se sobreseyó respecto de los actos de aplicación de los mismos, lo anterior con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo.--- Es aplicable la tesis jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número ciento veintitrés, visible en la página doscientos veintiocho, de la primera parte del último apéndice al Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "LEYES AMPARO CONTRA, Y CONTRA ACTOS DE APLICACION DE LAS MISMAS. SOBRESEIMIENTO".



92/89

**CUARTO.-** Inconforme con la sentencia anterior, el quejoso interpuso recurso de revisión. Por acuerdo de dos de febrero de mil novecientos noventa y seis, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió el recurso.

El Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, en su pedimento respectivo, solicitó se confirme el sobreseimiento.

Por acuerdo del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha siete de marzo de mil novecientos noventa y seis, fueron turnados los autos al Ministro Mariano Azuela Güitrón.

El asunto fue listado para sesión el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y seis.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO.-** Este Alto Tribunal en Pleno es competente para conocer del asunto por tratarse de un recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en la audiencia constitucional por un Juez de Distrito, en un juicio de amparo en que se impugnó la constitucionalidad del artículo 170 fracción II, apartado D, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y subsiste en el recurso el problema de constitucionalidad planteado. Son aplicables los artículos 94, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

**SEGUNDO.-** La parte recurrente expresó los siguientes agravios:

*"PRIMER AGRAVIO.- La JUEZ DECIMO PRIMERO (sic) DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, realiza una inadecuada valoración de las constancias de autos, al celebrar INDEBIDAMENTE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, ya que se encontraban señalado el día once de julio del año de 1995 para su celebración, ocurriendo lo siguiente:--- 1.- Mediante auto dictado el día 04 de julio de 1995 la Juez A Quo ordenó que a la quejosa se le diera vista con los informes justificados rendidos por las responsables.--- 2.- El auto de referencia fue listado el día 06 de julio de 1995, surtiendo sus efectos el día 7 de julio de 1995, (los días 8 y 9 de ese mismo mes y año, fueron sábado y domingo).--- Por lo tanto, el término comenzaba a correr el día lunes 10 de julio del presente año, y si la audiencia constitucional se encontraba fijada para el día siguiente (11 de julio), resultaba evidente que la misma debió diferirse, ya que si bien es verdad no fijó plazo para la vista, se ha de entender que era por tres días, acorde a la aplicación supletoria del artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, en concordancia con el 149 de la Ley de la Materia, más aún si se toma en consideración que la quejosa presentó un escrito solicitando el diferimiento, antes de la hora fijada previamente*





93  
90

para la celebración de la audiencia, resultando en consecuencia que la audiencia constitucional, no debió celebrarse, ya que incluso la Juez A Quo debió ordenar que se corriera traslado a la quejosa con los informes justificados rendidos por las responsables, por tales razones habrá de REVOCARSE LA RESOLUCION IMPUGNADA PARA EL EFECTO DE LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE.---  
SEGUNDO AGRAVIO.- En el considerando segundo de la sentencia recurrida, la JUEZ A QUO, realiza una indebida fijación de los actos reclamados y de las pruebas conducentes para tenerlos por acreditados, no resultando cierto como lo afirma, al considerar que el Director del Heroico Colegio Militar negó los actos reclamados, sin que obre prueba alguna en contrario, ya que lo cierto es que a pesar de tal negativa, EN AUTOS SI OBRAN PRUEBAS DE LOS ACTOS IMPUTADOS A ESTA AUTORIDAD, porque la hoy quejosa en su escrito de demanda de garantías, en el capítulo correspondiente le imputó LA DETERMINACION O RESOLUCION DICTADA EL DIA 22 DE MAYO DE 1995, POR EL CONSEJO DE HONOR DEL HEROICO COLEGIO MILITAR, y basta apreciar que del informe justificado rendido por el Secretario de la Defensa Nacional, éste precisamente anexa dicha determinación o resolución (fojas 108), advirtiéndose en su encabezado la intervención del General de Brigada D.E.M. RIGOBERTO

CASTILLEJOS ADRIANO (44546) DIRECTOR DEL  
 HEROICO COLEGIO MILITAR Y PRESIDENTE, y al  
 final de dicho documento estampa su firma  
 correspondiente, de lo cual sólo se puede deducir  
 legalmente que dicha autoridad incurrió en  
 falsedad al negar la existencia del acto reclamado,  
 por lo cual la JUEZ A QUO indebidamente hace  
 valer la fracción IV del artículo 74 de la Ley de  
 Amparo, en efecto se procede a transcribir sólo lo  
 conducente por tratarse de un documento en  
 extremo extenso, y de obviar repeticiones: --- "En  
 el Campo Militar número 1-C Tlalpan, Distrito  
 Federal, siendo las dieciocho horas del día 22 de  
 mayo de mil novecientos noventa y cinco,  
 reunidos en el local que ocupa el auditorio de este  
 plantel, los ciudadanos GENERAL DE BRIGADA  
 D.E.M. RIGOBERTO CASTILLEJOS ADRIANO  
 (4454461), DIRECTOR DEL HEROICO COLEGIO  
 MILITAR Y PRESIDENTE..... SU JUEZ A  
 Presidente del Consejo de Honor les hizo saber la  
 determinación a los acusados,  
 ..... Al final del  
 documento se aprecia su nombre, rango militar, su  
 intervención como Presidente y Director, y su  
 firma".--- En tales circunstancias, se debió  
 conceder a la quejosa el Amparo y Protección de  
 la Justicia Federal, y no sobreseer, como  
 indebidamente lo hace la Juez A Quo, ya que si  
 existe en autos prueba suficiente que desvirtúa la  
 negativa de la autoridad a comento, más aún



cuando se debió de advertir que se trata de documentales públicas por las propias responsables.--- TERCER AGRAVIO.--- Asimismo, la JUEZ A QUO, en el considerando cuarto de la sentencia que nos ocupa, tampoco realiza una fijación clara y precisa de los actos reclamados, y no expresa los fundamentos legales en que se apoyó para sobreseer, ya que indebidamente afirma que de la constancia que corre agregada en autos a fojas ciento dieciséis, que acompañó el Secretario de la Defensa Nacional a su informe justificado se desprende que se trata de actos consentidos expresamente, lo cual constituye una aseveración del todo contraria a derecho, por los siguientes motivos: 1.- Acto consentido es aquel respecto del cual no se ha interpuesto NINGUN MEDIO DE DEFENSA LEGAL, lo que quiere decir que si no se hace uso del derecho otorgado por la ley, evidentemente se traducirá en un consentimiento.--- 2.- El consentimiento de un acto, DEBE VERSAR SOBRE UN ACTO PRESENTE Y CIERTO, NO PUEDE CONSENTIRSE UN ACTO DE AUTORIDAD HACIA EL FUTURO, porque la propia autoridad bien podría por motivos propios, ejecutarlo o no.--- 3.- Los derechos otorgados por una ley al gobernado, no son renunciables, NI SE PUEDEN CONSENTIR HACIA EL FUTURO, MUY PARTICULARMENTE SI LE HAN DE CAUSAR AGRAVIO.--- En este orden de ideas, resulta evidente que la Juez A Quo no analiza

correctamente los autos, porque la constancia a que hace referencia, sólo puede ser considerada como un "RECIBO" (así se aprecia de su texto), precisamente del oficio número SAL-2779 de fecha 23 de mayo de 1995, el cual la propia quejosa anexó a su demanda de amparo sin que ello implique un consentimiento, SUPONIENDO SIN CONCEDER que con dicho "Recibo" estuviera consintiendo los actos futuros "se le girarán órdenes de baja" a que se refiere el OFICIO número SAL-2779, se debe apreciar que este oficio contiene tres supuestos:--- Primero.- El que se refiere a la comunicación de que se GIRARAN (ACTO FUTURO), de órdenes de baja.--- Segundo. En el segundo párrafo del mismo oficio (SAL-2779), SE LE OTORGA UN DERECHO refiriendo un plazo de quince días para manifestar lo que a sus intereses convenga.--- Tercero.- La misma autoridad considera que sólo transcurrido el plazo de quince días, sin que se reciba contestación alguna se le tomará por conforme.--- Por lo tanto, si la Juez A Quo argumenta que con dicho "Recibo" se acredita el consentimiento de los actos a que se refiere el oficio SAL-2779 (de fecha 23 de mayo de 1995), debió de expresar los fundamentos legales, acorde a la fracción II del artículo 77 de la Ley de la Materia, que le sirvieron de base para sobreseer, y no efectuar una afirmación sin sustento que solamente decir que de la transcripción realizada "se ve que el quejoso





95 92

consintió expresamente las órdenes de baja", y que por esa razón tales órdenes de baja, no son otra cosa que actos consentidos, cuando lo cierto es que en la fecha 23 de mayo de 1995, las órdenes de baja todavía no existían (no se puede consentir un acto que no sea de naturaleza presente), la orden de baja nunca fue dictada en el oficio en el que se basa la A Quo, sino en el diverso oficio número SAL-2849 de fecha 23 de mayo de 1995, y es este oficio en el que se contiene el verdadero acuerdo material de baja, y respecto de este oficio (también impugnado, y ofrecido como prueba por la propia quejosa anexándolo a la demanda de amparo) la hoy demandante de garantías jamás manifestó ni su consentimiento tácito, y mucho menos expreso, por el contrario basta observar los autos para advertir claramente en su conjunto que nunca ha estado de acuerdo en los actos reclamados, materia del presente juicio de amparo.--- En efecto, la naturaleza de un consentimiento expreso, es que debe tratarse de un acto volutivo sin presión alguna, porque ello implicaría un vicio grave de voluntad, ya que bajo cualquier tipo de coacción esencia de un consentimiento carecería de valor, no debe pasar inadvertido de que el "RECIBO" en el que la A Quo basa su argumento para acreditar un consentimiento, FUE ELABORADO POR LA PROPIA AUTORIDAD RESPONSABLE, EN SU PROPIA PAPELERIA, así se desprende de sus

COPIE DE  
LA FICION:  
IERAL DE ACUERDOS.

rubros a los márgenes superior derecho e izquierdo, y a la circunstancia de que la hoy quejosa en esos momentos se encontraba recluida en la Guardia en Prevención, ya que su naturaleza era de acusado, así se observa incluso del texto del Consejo de Honor en su contra, por lo que resulta claro que no tenía acceso a máquinas de escribir, por lo que se reitera que este documento por sí solo no puede constituir un consentimiento sobre actos futuros (se girarán órdenes de baja), cabe transcribir el siguiente criterio jurisprudencial:---

"CONSENTIMIENTO INEXISTENTE CUANDO SE FIRMA BAJO UNA LEYENDA PUESTA POR LA AUTORIDAD FISCAL".--- No implica consentimiento de una liquidación fiscal la firma del causante bajo la leyenda "Acepto la determinación y liquidación de diferencias" cuando dicha leyenda fue impresa por la propia autoridad liquidadora, en razón de que conforme lo dispuesto por el artículo 1803 del Código Civil para el Distrito Federal, de aplicación supletoria, el consentimiento expreso debe manifestarse en forma verbal, por escrito, o por algún signo que no deje lugar a equivocación. En el caso es dudoso que se hubiese consentido la liquidación, ya que la mencionada leyenda no fue puesta por el causante, además SU TEXTO DA MAS BIEN LA IDEA DE UN SIMPLE ACUSE DE RECIBO.--- Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa. Amparo en revisión 898/79.-



916  
93

TOMAS MOLINA UGALDE.- 18 de octubre de 1979. UNANIMIDAD DE VOTOS.- Ponente CARLOS SILVA Y NAVA.- Secretaria MARIA DEL CARMEN TORRES MEDINA.--- En el mismo sentido: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.- Amparo en Revisión 749/79.- Adolfo Serrano Escobar.- 16 de Agosto de 1979.- UNANIMIDAD DE VOTOS. Amparo en Revisión 303/80.- Carlos Bautista Alcalá.- 12 de Junio de 1980. UNANIMIDAD DE VOTOS.- Ponente S.H.CHAPITAL.- Secretario Alejandro Garza Ruiz.--  
- CUARTO AGRAVIO.- En contra del Considerando Quinto de la sentencia impugnada solicito se tengan por reproducidos (en obvio de repeticiones y ahorro procesal) todos y cada uno de los argumentos vertidos en el agravio que antecede (tercero), para el efecto de acreditar que no se trata de actos consentidos por las razones expuestas en dicho apartado, y por consecuencia la Juez A Quo no debió sobreseer respecto de los actos reclamados del Presidente de la República y del Congreso de la Unión, ya que no nos encontramos en presencia de actos de aplicación respecto de los cuales exista un consentimiento ni tácito ni expreso en los términos que anteceden, resultando inaplicable el artículo 74 fracción IV de la Ley de Amparo, y mucho menos la tesis jurisprudencial que invoca, por el contrario al no estar acreditado ni un consentimiento tácito, ni expreso se debió de entrar al estudio de la

OFICE DE  
ANEXIONA  
AL EJECUTIVO

*Constitucionalidad de los actos reclamados de las autoridades a comento, y conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal.--- QUINTO AGRAVIO.- En contra del punto Resolutivo Unico, en virtud de ser una consecuencia de los considerandos impugnados, solicito (en obvio de repeticiones y de economía procesal), que todos y cada uno de los agravios vertidos con antelación se tengan por reproducidos en su integridad, para el efecto de desvirtuar este resolutivo".*

**TERCERO.-** Debe quedar firme el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito respecto del Director General de Banjército, en el considerando primero de la sentencia que se revisa, toda vez que el recurrente no formula agravio en su contra.

**CUARTO.-** En su primer agravio, la parte recurrente sostiene que la A Quo indebidamente celebró la audiencia constitucional, toda vez que se encontraba transcurriendo el plazo de la vista ordenada mediante auto de cuatro de julio de mil novecientos noventa y cinco, para que se impusiera del contenido de los informes justificados rendidos por las responsables.

Con el propósito de examinar el anterior argumento, se tiene presente que el artículo 149 de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone:

*"Artículo 149.- ...En todo caso, las autoridades responsables rendirán su informe con*





97  
94

*justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la fecha para la celebración de la audiencia constitucional; si el informe no se rinde con dicha anticipación, el juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, solicitud que podrá hacerse verbalmente al momento de la audiencia..."*

Asimismo, se hace necesario atender a las constancias de las actuaciones judiciales que obran en el expediente del juicio de amparo, que en lo conducente revelan lo que sigue:

a) Por auto admisorio de catorce de junio de mil novecientos noventa y cinco, se fijaron las nueve horas con veinticinco minutos del once de julio del citado año, para la celebración de la audiencia constitucional (foja 76).

b) En acuerdos de veintinueve y treinta de junio, así como de cuatro de julio de mil novecientos noventa y cinco (fojas 84, 90 y 135), la Juez del conocimiento ordenó agregar a los autos los informes justificados que rindieron el Director del Heroico Colegio Militar, Director General de Educación Militar, Subdirector de Educación Militar, Secretario de la Defensa Nacional, Apoderado General del Banco Nacional del Ejército y Director General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respectivamente, disponiendo que se diera vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera.

c) El once de julio del mencionado año, la A Quo determinó diferir la audiencia constitucional que había sido fijada para esa fecha, señalando las once horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de agosto siguiente para que tuviera verificativo (foja 139).

d) Mediante acuerdo de trece de julio de mil novecientos noventa y cinco, se tuvo por rendido un informe justificado del Delegado del Distrito Federal en Coyoacán, ordenándose la vista correspondiente al quejoso (foja 149). Cabe destacar que dicho informe fue desglosado del expediente por no corresponder al juicio de garantías que se revisa (foja 150).

f) Finalmente, el veintidós de agosto del propio año tuvo verificativo la audiencia constitucional.

Los antecedentes relatados ponen en evidencia, contrariamente a lo que alega la parte recurrente, que la Juez de Distrito no celebró la audiencia constitucional el once de julio de mil novecientos noventa y cinco, fecha originalmente señalada para ello, sino que tuvo verificativo hasta el veintidós de agosto siguiente, en atención a los acuerdos de vista para que el quejoso conociera el contenido de los informes justificados de las autoridades responsables, lo que demuestra que al haber permitido a la demandante el conocimiento de los susodichos informes con la anticipación prevista por el artículo 149 de la Ley de Amparo, debe concluirse que la actuación de la A Quo se apegó a la legalidad y obró conforme dispone la tesis visible en el Informe de Labores de 1989, Primera Sala, página 51, interpretada a contrario sensu, que dice:



98  
95

**"REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE AL NO DARSE VISTA A LA QUEJOSA CON LOS INFORMES JUSTIFICADOS RENDIDOS POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.-** Conforme al artículo 149, último párrafo, de la Ley de Amparo, si el juez de distrito no dio oportunidad a la quejosa de conocer los informes justificados, no debió tomarlos en consideración al dictar sentencia, pues lo procedente era haber diferido la audiencia para permitirle preparar sus pruebas."

En las apuntadas condiciones, como la Juez del conocimiento, a petición de la parte quejosa, difirió la audiencia constitucional con el objeto de que tuviera conocimiento oportuno y suficiente del contenido de los informes justificados rendidos por las responsables, debe considerarse infundado el agravio a examen.

**QUINTO.-** Por otra parte, en su segundo agravio, la recurrente controvierte la consideración de la A Quo en el sentido de tener por inexistentes los actos reclamados al Director del Heroico Colegio Militar, dado que de la resolución de veintidós de mayo de mil novecientos noventa y cinco, dictada por el Consejo de Honor del citado Colegio, se aprecia la intervención de su director, prueba que desvirtúa la negativa de dicha autoridad hecha valer en su informe justificado.

La resolución a que alude la recurrente, en la parte que interesa a este estudio, textualmente dice (fojas 108 a 113):

*"En el Campo Militar Número 1-C, Tlalpan, Distrito Federal, siendo las dieciocho horas del día veintidós de Mayo de Mil novecientos noventa y cinco, reunidos en el local que ocupa el Auditorio de este Plantel, los Ciudadanos General de Brigada D.E.M. RIGOBERTO CASTILLEJOS ADRIANO (4454461), Director del Heroico Colegio Militar y Presidente, Capitán Primero de Caballería RAUL FLORES MIRANDA (B-1148129) Primer Vocal y Capitán Primero de Caballería LAURO BENJAMIN VIDAL ZAPATA (10041901), Segundo Vocal y Secretario, integrantes del Honorable Consejo de Honor, con objeto de conocer la conducta observada por los Ciudadanos... Cabo de Cadetes de Tercer año de Infantería EDGAR JUAN (sic) COLINA RAMIREZ (C-744598), perteneciente a la Doceava Compañía del Cuerpo de Cadetes,...--- A continuación se les hizo saber a los acusados por parte del Presidente del Honorable Consejo de Honor, el cargo que se les imputa consistente en FALTAS MUY GRAVES CONTRA EL DEBER Y DECORO MILITAR QUE CONSTITUYE DISOLUCION ESCANDALOSA y que el Consejo fue reunido por disposición del propio Presidente y nombró para llevar la voz acusadora al Ciudadano*





SECRET DE  
DEFENSA  
GENERAL DE LOS EJERCITOS

Capitan 2/o. Infantería ANDRES TREJO ORTEGA (B-3828413).--- En seguida, el Ciudadano Capitan Segundo de Infantería ANDRES TREJO ORTEGA (B-3828413), se dirigió al auditorio en los siguientes términos: ...Cabo EDGAR JUAN (sic) COLINA RAMIREZ 4 de noviembre de 1994, omiso en el cumplimiento de sus obligaciones, consistente en no tender su cama y no supervisar a su Escuadra 20 puntos, 16 de Mayo de 1995 faltas graves, consistente en reñir con un compañero, contraviniendo una disposición de la Dirección del Plantel, y la conferencia que impartió el C. General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Comandante del Cuerpo de Cadetes 300 puntos, 19 de Mayo de 1995 faltas muy graves, contra el deber y decoro militar que constituye disolución escandalosa 300 puntos total de puntos 620... por todo lo antes expuesto solicito a este Honorable Consejo de Honor se solicite la baja del Heroico Colegio Militar y del Ejército Mexicano, al personal de Cadetes de Tercer año de Infantería que hoy se encuentra en el banquillo de los acusados...--- Acto seguido el Ciudadano Presidente del Honorable Consejo de Honor, hizo comparecer al Ciudadano Cabo de Cadetes de Tercer año de Infantería EDGAR JUAN (sic) COLINA RAMIREZ (C-744598), exhortándolo para producirse con verdad, pidiéndole manifestara sus generales... Acto seguido el Ciudadano Presidente del Honorable Consejo de Honor, le manifestó al

acusado que tenía derecho a nombrar un defensor entre los jefes y oficiales presentes con excepción de los miembros del Honorable Consejo de Honor, nombrando el acusado al Ciudadano Mayor de Infantería HORACIO REYES LEON (10114981), quien aceptó llevar la defensa del acusado... quien se dirigió en los siguientes términos: ...nuevamente solicito sea considerado mi defensor para la determinación que tome en relación en (sic) la falta cometida por este, la juventud que tiene y la falta de experiencia que posee lo han llevado a cometer las faltas que lo tiene en el banquillo de los acusados, considero fuera prudente se le diera otra oportunidad, para que corrigiera su conducta y termine con sus estudios, solicitándole al Honorable Consejo de Honor sea justo en su determinación...--- ...se le concedió la palabra al acusado para que manifestara lo que sus intereses conviniera en su defensa y descargo... Mi General yo pienso que si tomarse una cerveza y bailar con una enfermera es falta de honor Militar, pues yo creo que varios militares lo han hecho mi General y no es ninguna falta y quiero hacer la declaración que nosotros en ningún momento hemos estado tomando uniformados o fumando mi General, es todo.--- A continuación el Presidente del Honorable Consejo de Honor procedió a recoger la votación entre los miembros del mismo, para decidir sobre la culpabilidad o no del acusado; resultando CULPABLE por unanimidad... Como resultado de



100  
97

dichas votaciones los integrantes del Honorable Consejo de Honor se retiraron a deliberar sobre los castigos a imponerse, a los acusados, y a todos los presentes de la siguiente forma: ...el Honorable Consejo de Honor de este Plantel ha encontrado que los Ciudadanos Cadetes de Tercer año aquí presentes, son culpables de los hechos que dieron motivo para conocer su conducta por lo que se ha llegado a la determinación de solicitarles la baja del Heroico Colegio Militar y del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, por haber observado mala conducta y por ser indignos de pertenecer a él, POR FALTAS MUY GRAVES CONTRA EL DEBER Y DECORO MILITAR, QUE CONSTITUYEN, DISOLUCION ESCANDALOSA; para los efectos legales que procedan, dese cuenta a la superioridad con la determinación a que llegó el Honorable Consejo de Honor remitiéndole copia de la presente Acta para que ordene lo conducente: dándose por terminada la misma y firmando todos los que en ella intervinieron.

Presidente.

EL GENERAL DE BRIGADA DEM. DIRECTOR.

RIGOBERTO CASTILLEJOS ADRIANO.

(4454461).

(Rubrica)

PRIMER VOCAL.

SEGUNDO VOCAL

EL CAPITAN PRIMERO

EL CAPITAN PRIMERO

DE CABALLERIA

DE CABALLERIA

RAUL FLORES MIRANDA.

LAURO BENJAMIN VIDAL



A COSTE DE  
DE LA COMISION.  
GENERAL DE ACUERDOS.

ZAPATA.

(B-1148129)

(10041901)

(Rúbrica)

(Rúbrica)..."

Asimismo, para determinar si el General Rigoberto Castillejos Adriano tuvo participación en la resolución transcrita con el carácter de Director del Heróico Colegio Militar y, por ende, le es atribuible dicho acto, conviene atender a las disposiciones reguladoras de la composición de los Consejos de Honor castrenses contenidas en los artículos 1o., 2o., 4o., inciso b), y 20 del Reglamento para la Organización y Funcionamiento de los Consejos de Honor en el Ejército, que establecen:

"ART. 1o. El Consejo de Honor tiene por objeto juzgar a los Oficiales y Tropa que cometan faltas a la moral, a la dignidad y al prestigio del ejército; dictaminar sobre los castigos correccionales que deban imponerse consignar a la superioridad los casos que correspondan; asimismo, acordar las notas de conceptos que hayan de ponerse en las Hojas de Servicio de los Oficiales y Memorial de Servicios de los individuos de Tropa.

ART. 2o.- El Consejo de Honor se constituirá en cada Cuerpo, Unidad, Establecimiento y Dependencia, en la forma siguiente:





I. Con cinco miembros en los Batallones, Regimientos de Caballería y Artillería, Aeronáutica, Departamentos y Dependencias de la Secretaría de Guerra.

II. Con tres miembros en las unidades Navales, Establecimientos y Dependencias del Ejército y Armada Jefaturas de Guarnición y Comandos Superiores (brigadas, Divisiones, Jefaturas de Operaciones, grupos, divisiones de Buques, escuadrillas y comandancias Generales de Marina).

Personal en las distintas Dependencias del Ejército.

ART. 4o.- Los miembros del Consejo de Honor que previene la Fracción II del artículo 2o., son:

...b) Establecimientos y dependencias del Ejército y Armada.

**Presidente.-** El Director o Subdirector, Jefe o Subjefe, según el caso.

1er. Vocal.- Un Capitan 1o. o su equivalente.

2o. Vocal.- Un Capitan 1o. o su equivalente.

Los Vocales serán elegidos por votación, y el 2o. fungirá como Secretario...

ART. 20.- Terminada la audiencia, el Presidente procederá a recoger la votación, entre los miembros del Consejo, para decidir si el acusado es o no culpable. Dicha votación deberá



*hacerse principiando por el de menor categoría o antigüedad."*

Las disposiciones anteriores, relacionadas con la resolución reclamada, llevan a concluir que si bien el General Rigoberto Castillejos Adriano, persona que desempeña el cargo de Director del Heroico Colegio Militar, intervino en la sesión y votación sobre la responsabilidad del quejoso en los hechos que le fueron imputados, no lo hizo con tal carácter, sino con el de Presidente y miembro integrante del Consejo de Honor y Justicia correspondiente, órgano colegiado que de conformidad con el artículo 20 del Reglamento que regula su funcionamiento, fue quien determinó por unanimidad solicitar al Titular de la Secretaría de la Defensa Nacional la baja del quejoso del citado Colegio, razón por la cual, contrariamente a la pretensión del recurrente, el acta de la resolución relativa no resulta apta para desvirtuar la negativa de la autoridad responsable que hizo valer en su informe justificado respecto del aludido acto, pues de lo dicho se concluye que como su emisión correspondió al Consejo de Honor en forma colegiada, y no al Director del plantel en lo particular, el primero es quien, en su caso, debe responder por la legalidad de su actuación, motivo por el que resulta infundado el agravio que se formuló al respecto.

SEXTO.- En el tercer agravio, la parte recurrente controvierte el sobreseimiento decretado por la Juez A Quo en el considerando cuarto de la sentencia recurrida, bajo la consideración de que los actos reclamados fueron consentidos expresamente por el quejoso, apoyando



102  
99

su decisión en la constancia que obra a fojas ciento dieciséis de autos, alegando substancialmente, entre otros aspectos, que dicho razonamiento es ilegal, en virtud de que el consentimiento debe versar sobre un acto presente y cierto, sin que pueda consentirse un acto de autoridad hacia el futuro, por lo cual la firma que aparece en el oficio SA-2779 de veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y cinco no puede considerarse como consentimiento de la orden de baja que le sería girada con posterioridad.

Con el propósito de examinar el agravio propuesto, se tiene presente que el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías es improcedente contra actos consentidos expresamente por el quejoso, o por manifestaciones de éste que entrañen consentimiento.



CORTE DE  
LA NACION.  
SALA DE ACUERDOS.

Asimismo, conviene atender al criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal que establece las condiciones para que un acto de autoridad pueda considerarse como consentido, visible en las páginas 363 y 364 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1988, que literalmente es como sigue:

§ "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido

*dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad."*

Una vez sentado lo anterior, para determinar si el acto que se reputó consentido por la Juez del Distrito era existente al momento en que el quejoso dio su consentimiento respecto de él, y con ello cumplir la primera condición descrita en el criterio judicial a que se alude, es necesario apreciar la constancia que le sirvió para decretar el sobreseimiento fundado en dicha causal, destacando que el realizado de la transcripción es lo que aparece escrito a puño y letra del ahora recurrente, siendo que el resto es un formato elaborado a máquina, documento que literalmente dice:

"DIR. GRAL EDUC MIL.  
ADMINISTRATIVA.

  
SUPREMA  
SECCION DE  
SECRETARIA GNER

*RECIBI:- La notificación de la Dirección General de Educación Militar (Sección Administrativa), en oficio número SA-2779 de fecha 23 de mayo de 1995, del que quedo debidamente enterado de su contenido y manifiesto mi consentimiento para que me giren órdenes de baja como tal, del Heróico Colegio Militar y del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por haber observado MALA CONDUCTA, determinada por el H. Consejo de Honor del mencionado plantel, al haber acumulado más de*





103  
100

500 puntos de demérito durante el ciclo escolar  
1994-95.

20:50  
H O R A.

Campo Militar # 1-C Tlalpan D.F. a 24-05-95  
LUGAR Y FECHA.

EL CADETE DE 3/er. AÑO.

(rubrica)

EDGAR IVAN COLINA RAMIREZ.  
(C-744598).

NOTA:- ESTE DOCUMENTO DEBE SER  
DEVUELTO A ESTA DIRECCION GENERAL POR EL  
C. DIRECTOR DEL PLANTEL."

CORTE DE  
LA NACION.  
AL DE ACUERDOS.

El oficio número SA-2779 a que se alude en  
la constancia de notificación transcrita (foja 115),  
textualmente es como sigue:

"DIRECCION GENERAL  
DE EDUCACION  
MILITAR.  
ADMINISTRATIVA.  
T R A M I T E.  
SA-2779.

-Se le comunica que se girarán órdenes de  
baja como tal, del Hco. Col. Mil. y del  
EJTO. Y F.A.M., por haber observado MALA  
CONDUCTA.

Campo Militar No. 1-B, POPOTLA TACUBA,  
D.F., a 23 de mayo de 1995.

*C. Cadete de 3/er. año.-  
EDGAR IVAN COLINA RAMIREZ.  
A CARGO DEL HCO. COL. MIL.  
Tlalpan, D.F.*

*POR ACUERDO DEL C. GENERAL  
SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL y de  
conformidad con lo estipulado por los artículos  
170 Fracción II Apartado "D" de la Ley Orgánica  
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y 73  
Fracción VIII del Reglamento del Heroico Colegio  
Militar, se le comunica que se le girarán órdenes  
de baja como tal, del mismo y del Ejército y Fuerza  
Aérea Mexicanos, por haber observado MALA  
CONDUCTA, determinada por el H. Consejo de  
Honor del mencionado plantel, al haber acumulado  
más de 500 puntos de demérito durante el ciclo  
escolar 1994-95.*

*En la inteligencia de que se le conceden  
QUINCE DIAS, contados a partir de la fecha en  
que reciba el presente documento para manifestar  
lo que a sus intereses convenga. En el concepto  
de que si terminado el plazo concedido no se ha  
recibido contestación alguna, se le tomará como  
conforme y se le girarán las órdenes de baja  
correspondientes.*

*Atentamente.  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.  
P.O. DE GRAL. BGDA. DEM. DIRECTOR.  
EL GRAL. BRIG. D.E.M. SUBDIRECTOR.  
(rubrica).  
LUIS A. F. CABEZA DE VACA AVALOS."*



104  
101

Las documentales transcritas demuestran que el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco, le fue comunicado al quejoso el oficio fechado un día anterior, en el cual se determinó que se le girarían órdenes de baja del Heroico Colegio Militar y del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, apareciendo en la constancia de notificación respectiva, que otorgó su consentimiento para que se giraran dichas órdenes, lo cual revela que la aquiescencia del ahora recurrente se refirió a un acto futuro, que era inexistente al momento de la manifestación de voluntad, toda vez que la orden de baja a que se alude, fue emitida por el Secretario de la Defensa Nacional hasta el veintiséis de mayo siguiente, es decir, con posterioridad al consentimiento otorgado por el recurrente.

TE DE  
ACION  
ACUERDOS

Lo anterior es suficiente para considerar fundado el agravio formulado sobre el particular, toda vez que si la manifestación de voluntad del quejoso no se refirió a un acto existente en el momento de su otorgamiento, no se cumplió con una de las condiciones necesarias para tener por consentida la orden de baja que se reclama, por haberse emitido ésta con posterioridad, resultando inaplicable la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, al estar en presencia de una circunstancia extraordinaria que no contempla dicha hipótesis, porque como ya se dijo, el consentimiento debe versar sobre actos existentes, dado que lo normal es que el particular consienta lo que conoce, una vez que haya ponderado los beneficios o perjuicios que pueden derivar de su asentimiento, así como los fundamentos y motivos

expresados en el acto de autoridad, aspectos que son abordados en la tesis que sostuvo este Alto Tribunal, consultable en la página 3783, del Tomo LXXVII, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"ACTOS

CONSENTIDOS

*EXPRESAMENTE.- La fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, considera improcedente el juicio de garantías contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; pero pueden presentarse dos situaciones distintas, tratándose del consentimiento expreso de los actos de autoridad; una situación común y corriente en que el particular, con posterioridad a la comisión de un acto y con pleno conocimiento de él declara expresamente que lo consintió o manifestó en alguna otra forma su conformidad; la segunda situación es insólita, pues se realiza rara vez y estriba en que el particular con anterioridad a la fecha en que tiene existencia el acto del poder público manifiesta que está conforme con el sentido en que se dicte, y dichas situaciones no están regidas por el mismo precepto, porque la causa de improcedencia de que habla la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere únicamente al consentimiento posterior al acto de autoridad; y la razón es indiscutible, puesto que por la redacción de la norma, se advierte que la voluntad de la ley es constreñir la causa de*





105-  
102

*improcedencia a este único caso, ya que lo normal es que se consienta lo que se conoce, después de calcular los beneficios o perjuicios que se pueden derivar del consentimiento. Si el legislador hubiera pretendido referirse también a la otra situación de que se habla, necesariamente lo hubiera hecho en términos expresos o indubitables por ser extraordinaria esta clase de excepción, y derecho constitucional de pedir amparo contra actos de autoridad que se estimen violatorios de garantías."*



OR  
AN  
L DE

En las apuntadas condiciones, al resultar fundado el agravio examinado, procede levantar el sobreseimiento decretado por la Juez de Distrito respecto de los actos reclamados de las autoridades dependientes de la Secretaría de la Defensa Nacional precisados en el considerando cuarto de la sentencia recurrida, debiendo hacerse extensivo ese levantamiento a la ley y reglamentos impugnados, dado que el sobreseimiento decretado respecto de ellos en el considerando quinto de la resolución que se revisa se apoyó en el consentimiento de sus actos de aplicación, procediendo, en consecuencia, este Alto Tribunal a examinar las demás causas de improcedencia alegadas por las partes y aquéllas que de oficio se adviertan.

**SEPTIMO.-** Las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional sostienen que el juicio es improcedente respecto del oficio número SA-2779 de 23 de mayo de mil novecientos noventa y cinco, con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114,

fracción II, de la Ley de Amparo, dado que no constituye una resolución definitiva, en virtud de que únicamente comunicó al quejoso que se le girarían órdenes de baja como Cadete del Heroico Colegio Militar, concediéndole un plazo de quince días para que manifestara lo que a su interés conviniera, y una vez realizada esta manifestación o transcurrido el plazo, entonces se girarían las órdenes de baja, como aconteció, las que en todo caso son las que constituyen la resolución definitiva, argumento que se estima operante por las razones que se expondrán a continuación.

Aunada a la anterior aseveración, conforme a lo dispuesto por el artículo 73, último párrafo de la Ley de Amparo, que establece la obligación de que se examine la procedencia del juicio, este Alto Tribunal oficiosamente advierte la misma causa de improcedencia alegada por las autoridades respecto del diverso acto reclamado consistente en la resolución de veintidós de mayo de mil novecientos noventa y cinco, dictada por el Consejo de Honor del Heroico Colegio Militar.

Para estar en aptitud de demostrar las conclusiones anunciadas, debe atenderse, en primer lugar, a lo dispuesto por el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, que a la letra dice:

*"Artículo 114.- El amparo se pedirá ante juez de Distrito:*

*...II. Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.*

*En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en*



10/6  
103

*forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia."*

El numeral transcrito establece la procedencia del juicio de garantías contra actos que provengan de autoridades administrativas. Cuando dichos actos provengan de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en ésta o durante el procedimiento, si dichas violaciones procedimentales afectan las defensas del quejoso.

Ahora bien, a continuación deben examinarse las disposiciones reguladoras de las etapas del procedimiento militar que fue instaurado en contra del quejoso, que concluyó con la orden de baja del Heroico Colegio Militar girada en su perjuicio, contenidas en los preceptos del Reglamento para la Organización y Funcionamiento de los Consejos de Honor en el Ejército y Fuerza Armada que a continuación se transcriben:

*"Art. 60.- El Consejo de Honor tiene facultades para:*

*I. Acordar las notas que hayan de ponerse en las Hojas de Servicios de los Oficiales,*

y en el Memorial de servicios de los individuos de tropa;

II. Dictaminar sobre los castigos correccionales que deban imponerse, desde Capitán 1o. hasta el soldado, por faltas cuyo conocimiento sea de la competencia de este Consejo.

III. Consignar a la Superioridad los casos en que un Oficial deba ser suspendido temporalmente para ejercer en el activo; o destituido de su empleo en el Ejército, de conformidad con la Ley Penal Militar.

Art. 7o.- La suspensión y la destitución serán impuestas, si procede, por el tribunal competente al militar que sea consignado por el Consejo de Honor. La situación del sentenciado en uno u otro caso, será la que fija la Ley Penal Militar.

Art. 16.- Cuando el Consejo se reúna para juzgar a algún acusado, se procederá en la forma siguiente:

Reunido el Consejo y estando presente el acusado, el Presidente le tomará sus generales, lo exhortará a producirse con verdad y le manifestará que tiene derecho a nombrar defensor a alguno de los Jefes u Oficiales de la Corporación, Dependencia, Guarnición o Unidad a que pertenezca y que se encuentre presente en la audiencia, con exclusión de los miembros del





10/2/96  
104

*Consejo. Si el acusado no nombrare defensor, el Presidente lo designará.*

*Art. 17.- A continuación le hará conocer los cargos que se le imputan y si el Consejo se ha reunido por orden superior o por disposición del propio Presidente, haciendo comparecer y declarar a los peritos y testigos que fuere necesario.*

*Art. 18.- La voz de la acusación la llevará un Jefe u Oficial nombrado por el Presidente del Consejo.*

*Art. 19.- Después hará uso de la palabra la defensa, para que exponga cuanto crea favorable al acusado. Una vez que hubiere terminado de hablar el defensor, el Presidente manifestará al acusado que puede usar de la palabra para hacer su descargo, sin más limitación que el respeto a la ley y a las autoridades.*

*Art. 20.- Terminada la audiencia, el Presidente procederá a recoger la votación, entre los miembros del Consejo, para decidir si el acusado es o no culpable. Dicha votación deberá hacerse principiando por el de menor categoría o antigüedad.*

*Art. 21.- Si el resultado de la votación fuere condenatorio, se procederá a deliberar sobre el correctivo disciplinario que deba imponerse, con los límites prevenidos en el Capítulo III.*

*Art. 24.- El secretario levantará un acta en la que asentará:*

RTE DE  
NACION.  
DE ACUERDOS.

*...V. El resultado de la votación de los miembros del Consejo y el acuerdo que se hubiere tomado.*

*Art. 26.- El Presidente del Consejo remitirá en cada caso, a la Secretaría de Guerra y por los conductos reglamentarios, un tanto de la acta levantada con motivo de la reunión del Consejo, para dar cuenta de las resoluciones que haya dictado."*

**Asimismo, debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 170, fracción II, apartado D, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que dice:**

*"Artículo 170.- La baja es la separación definitiva de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea, del activo de dichas instituciones y procederá por ministerio de Ley o por Acuerdo del Secretario de la Defensa Nacional en los siguientes casos:*

*...II. Procede por acuerdo del Secretario de la Defensa Nacional:*

*D. Tratándose del personal de Tropa y de los militares de la clase de Auxiliares, además de las causas señaladas en los incisos que anteceden, podrán ser dados de baja por observar una mala conducta, determinada por el Consejo de Honor de la Unidad o Dependencia a que pertenezcan, o por colocarse en situación de no poder cumplir con sus obligaciones militares, por*



108  
105

*causas no imputables a la Secretaría de la Defensa Nacional. En ambos casos, siempre será oído en defensa el afectado."*

Los preceptos transcritos ponen en evidencia que si bien el procedimiento sancionador que se le instauró al quejoso fue instruido por el Consejo de Honor correspondiente, quien en la resolución de veintidós de mayo de mil novecientos noventa y cinco dictaminó sobre su responsabilidad militar y la sanción que a su juicio debía imponérsele, resolución que motivó la comunicación de veintitrés de mayo siguiente en la que se le anunció al ahora recurrente que se le girarían órdenes de baja por haber observado mala conducta, sin embargo, la resolución definitiva que decretó su baja del Heroico Colegio Militar fue emitida por el Secretario de la Defensa Nacional, con fundamento en el artículo 170, fracción II, apartado D, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, antes transcrito, tal y como se advierte del oficio de veintiséis de dicho mes y año (foja 117).

Por lo anterior, si la resolución del Titular de la Secretaría en mención es la que puso fin al aludido procedimiento sancionador, y el juicio de amparo sólo puede promoverse contra ella conforme a las reglas primeramente asentadas, con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción II, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, procede sobreseer, como se advierte de oficio y lo proponen las responsables, respecto de la resolución del Consejo de Honor del Heroico Colegio Militar y la comunicación contenida en el oficio SA-2779 de

veintidós y veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y cinco, respectivamente, al carecer tales actos de la definitividad requerida por el segundo precepto a que se alude, para ser susceptibles de impugnarse mediante el juicio de garantías.

No pasa inadvertido a este Alto Tribunal el contenido del criterio sustentado por su Segunda Sala, publicado en la página 73 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación correspondiente al mes de enero de mil novecientos novneta y seis, Novena Epoca, que dice:

"AMPARO CONTRA UN REGLAMENTO  
CON MOTIVO DE UNA RESOLUCION  
ADMINISTRATIVA DICTADA DENTRO DE UN  
PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE  
JUICIO. ES PROCEDENTE SI CONSTITUYE SU  
PRIMER ACTO DE APLICACION.- El artículo 114,  
fracción II de la Ley de Amparo establece que  
tratándose de actos que no provengan de  
tribunales judiciales, administrativos o del trabajo,  
cuando el acto reclamado emane de un  
procedimiento seguido en forma de juicio, el  
amparo sólo podrá promoverse contra la  
resolución definitiva por violaciones cometidas en  
la misma o durante el procedimiento, si por virtud  
de estas últimas hubiere quedado sin defensa el  
quejoso o privado de sus derechos que la ley de la  
materia le concede. Sin embargo, cuando la  
resolución dictada dentro del procedimiento, aun  
sin ser la definitiva, constituye el primer acto de





109  
106

aplicación de un reglamento en perjuicio del promovente y se reclame también éste, surge una excepción al principio de definitividad establecido por la fracción II citada, en virtud de la indivisibilidad que opera en el juicio de garantías cuando se impugna una norma general heteroaplicativa, que impide su examen desvinculándola del acto de aplicación que actualiza el perjuicio. En ese supuesto, el amparo procede tanto contra el reglamento como contra su primer acto de aplicación, conforme a la fracción I del ordenamiento legal mencionado."



OF. DE  
A. N.  
L. DE A. G. U. S.

El criterio transcrito no resulta aplicable al presente caso, en virtud de que el quejoso no promovió el juicio de amparo con motivo únicamente de la resolución dictada por el Consejo de Honor del Heroico Colegio Militar o de la comunicación que constituyó su consecuencia procedimental, sino que, en acatamiento a la regla prevista en el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, lo hizo para impugnar la orden de baja emitida por el Secretario de la Defensa Nacional, situación que obliga al examen de dicha resolución definitiva, así como a decretar el sobreseimiento de los actos procedimentales que se reclaman, hecho que de ninguna manera impide que los vicios de legalidad que se les atribuyen sean estudiados por el órgano de control constitucional, mas no con el carácter de actos reclamados, sino como violaciones susceptibles de afectar las defensas del quejoso durante el trámite del procedimiento

correspondiente que tengan una relación directa y trasciendan al resultado de la resolución final.

En las citadas condiciones, por las razones anteriormente expuestas, procede decretar el sobreseimiento respecto de la resolución del Consejo de Honor del Heroico Colegio Militar y la comunicación contenida en el oficio SA-2779 de veintidós y veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y cinco.

OCTAVO.- En otro orden de ideas, las aludidas responsables aducen que respecto del acuerdo y orden de baja contenidos en el oficio SA-2849 de veintiseis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, el juicio es también improcedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 192 de la Ley de Amparo y la tesis jurisprudencial publicada en la página 116 de la Compilación de 1917 a 1988, de rubro "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA", en virtud de que dicho oficio constituye un acto derivado del diverso SA-2779 de veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y cinco que fue consentido expresamente por el demandante.

Al respecto, debe recordarse que de conformidad con los razonamientos expuestos en el considerando sexto de esta resolución, la manifestación del quejoso en el sentido de dar su aquiescencia para que se le giraran órdenes de baja en su contra no constituye consentimiento de tales órdenes, asimismo, debe atenderse a lo resuelto en el considerando séptimo en que se determinó sobreseer sobre los actos procedimentales en razón de que el



no  
107

juicio de amparo sólo procede respecto de su resolución final, debiendo examinar los vicios que se atribuyan a los actos de procedimiento en cuanto afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo.

Las consideraciones a que se alude llevan a concluir que, contrariamente a lo que se pretende, la resolución definitiva que puso fin al procedimiento que se examina no puede considerarse como una consecuencia legal y necesaria de los actos procedimentales que le anteceden, puesto que el Secretario de la Defensa Nacional cuenta con la potestad legal de determinar la procedencia o improcedencia de girar las órdenes de baja de la institución castrense, conforme a la cual puede y debe, fundada y motivadamente, corroborar o apartarse de las conclusiones contenidas en el dictamen respecto de la responsabilidad militar de los acusados que le haga llegar el Consejo de Honor correspondiente.

Sirve de apoyo a este razonamiento, la tesis visible en la página 2636 de la Compilación de 1917 a 1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, aplicable por analogía, que a la letra es como sigue:

"PROCEDIMIENTO. OPORTUNIDAD PARA IMPUGNARLO EN AMPARO. La circunstancia de que los quejosos no hubieren impugnado en amparo el procedimiento que conduce a la resolución presidencial reclamada, dentro del término legal a partir de la fecha en que tuvieron conocimiento de su iniciación, no implica que lo hubieren consentido tácitamente, en virtud de que sólo pueden reclamarlo al hacer valer la

*acción constitucional contra la resolución definitiva con la que culmina dicho procedimiento (seguido en forma de juicio), conforme a la fracción II, del artículo 114 de la ley de la materia; además, el contenido de la resolución presidencial, desfavorable a los quejosos, no puede ser una consecuencia legal necesaria del repetido procedimiento."*

A lo anterior debe agregarse, que de la demanda de garantías se advierte que la parte quejosa controvierte la constitucionalidad del acuerdo y orden de baja contenidos en el oficio SA-2849 de veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, por estimar que resulta violatorio de los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, por omitir expresar la fundamentación y motivación respecto de la sanción impuesta al quejoso, porque éste nunca tuvo oportunidad de defensa en el procedimiento correspondiente y porque desconoce la existencia del acuerdo del Secretario de la Defensa Nacional a que se alude en el citado oficio, y por ende, si está emitido por escrito y firmado por la mencionada autoridad.

Consecuentemente se concluye, que aun y cuando la resolución definitiva reclamada constituya una consecuencia del procedimiento sancionador de naturaleza castrense, como la parte quejosa le atribuye vicios propios de inconstitucionalidad, debe desestimarse la causal de improcedencia que se propone, con apoyo en la tesis jurisprudencial visible en la página 13 del Tomo VI, de la Compilación de 1917 a 1995, que dice:





111  
407  
108

"ACTOS DERIVADOS DE ACTOS  
CONSENTIDOS QUE SE IMPUGNAN POR VICIOS  
PROPIOS.- El juicio de amparo contra actos  
derivados de otros consentidos, sólo es  
improcedente cuando aquéllos no se impugnan por  
razón de vicios propios, sino que su  
inconstitucionalidad se hace depender de la del  
acto de que derivan."

En las condiciones descritas, como la  
resolución que determinó la baja del quejoso de la institución  
militar no puede considerarse como una consecuencia de los  
actos del procedimiento relativo, y además, se controvierte  
por vicios propios de inconstitucionalidad, deviene  
inoperante la causal de improcedencia que se propone y, al  
no hacerse valer otra, ni se advierte de oficio, procede  
estudiar el fondo del asunto.

NOVENO.- La parte quejosa expresó los  
siguientes conceptos de violación:

§ "PRIMERO.- Se violan en forma directa los  
artículos 14 y 16 constitucionales, por que la  
orden para girar ORDENES DE BAJA DEL  
HEROICO COLEGIO MILITAR Y DEL EJERCITO Y  
FUERZA AEREA MEXICANOS, contenida en oficio  
número SA-2779, DE FECHA 23 DE MAYO DE  
1995, EMITIDA POR EL SUBDIRECTOR DE LA  
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MILITAR,

es contrario al artículo 16 constitucional por que no se encuentra fundado ni motivado, ya que para satisfacerse lo anterior, la autoridad responsable debió citar los preceptos legales aplicables al caso concreto del quejoso, y por lo segundo debió explicar los razonamientos lógico jurídicos por los que considera aplicables los preceptos legales al caso concreto, debiendo de existir además una correcta adecuación entre ambas consideraciones, sin que sea permisible que únicamente se citen en el oficio de referencia los artículos 170 fracción II Apartado De (sic) la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y 733 fracción VIII del Reglamento del Heroico Colegio Militar, ya que se agregue en forma lisa y llana que se aplican por haber observado mala conducta, determinada por el Consejo de Honor del mencionado plantel, ya que en ningún momento explica por que los artículos que invoca se acomplan a alguna conducta desplegada por el quejoso o como es que éste se colocó en las hipótesis de referencia, por lo que solo es posible entender que el comunicado en el sentido de que se giraran órdenes de baja del Heroico Colegio Militar y del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, resulta totalmente contrario al espíritu constitucional, y asimismo resulta contrario al artículo 14 de la Carta Magna por no dar al quejoso ninguna oportunidad de defensa en contra de la orden de girar órdenes de baja, lo cual viola en forma



112  
108  
109

flagrante las formalidades esenciales del procedimiento, ya que a pesar de que en el oficio número SA-2779, se diga que se conceden quince días para manifestar lo que a sus intereses convenga, esto no satisface ninguna oportunidad de defensa por que no basta que la autoridad le otorgue un plazo determinado para revisar manifestaciones sino que es menester que en todo caso también fundará y motivará la existencia de la oportunidad de defensa y al no existir esta circunstancia resulta ser un acto del todo violatorio a los citados mandatos constitucionales.-

-- SEGUNDO.- La orden de baja del Heroico Colegio Militar y del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, contenido en el oficio número SA-2849 de fecha 26 de mayo de 1995, emitido en contra de EDGAR IVAN COLINA RAMIREZ, viola en forma directa los artículos 14 y 16 constitucionales, por que no se encuentra fundado y motivado, dado que solo se refiere a que de conformidad con los artículos 16, 17, 21 fracción IV, 32, 34 fracción I, 35 y 170 fracción II apartado D, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 2, 3, 5, 6, 7 y 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional y 73 fracción VIII, del Reglamento del Heroico Colegio Militar, el hoy quejoso causa baja como cadete del Heroico Colegio Militar y del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y únicamente especifica que dicha baja es por haber observado

MEXICANOS  
CORTE DE  
LA NACION.  
AL DE A.U.L.L.

*mala conducta determinada por el Consejo de Honor del citado colegio, en consejo formado el día 22 de mayo de 1995, al haber acumulado más de 500 puntos de demérito durante el ciclo escolar 1994-1995, pero de ninguna forma explica por qué los artículos que se menciona en el oficio son aplicables al caso concreto, por lo que la fórmula general de decir que con fundamento en ciertos preceptos legales y solamente por haber observado una mala conducta se le dá de baja del ejército al hoy demandante de garantías, cuando de su texto mismo no se desprende que la responsable explique por qué los artículos que invocan se acoplan o sirven de fundamento para una baja en el ejército como en el caso que nos ocupa, máxime si se toma en cuenta que la parte quejosa jamás aceptó haber cometido falta alguna y ante la inexistencia total de fundamentación y motivación y de adecuación entre ambas se debe declarar la inconstitucionalidad de dicho acto.--- Asimismo se violan las formalidades esenciales del procedimiento por que Edgar Iván Colina Ramírez nunca tuvo ninguna oportunidad de ofrecer pruebas o alegar mediante algún recurso previsto por la ley, a través del cual se pudiera satisfacer la existencia de un juicio previo, antes del acto de privación, ya que la patente de un militar no puede ser afectada en forma arbitraria por la autoridad, por que para los efectos del artículo 156 del Código de Justicia Militar, los alumnos cadetes de*





113  
110

los establecimientos de educación militar, con relación a los demás miembros del ejército serán considerados como Sargentos Primeros, y en tales circunstancias el quejoso no puede ser privado de su derecho de pertenencia al ejército sin que hubiere sido previamente juzgado ante los Tribunales Militares competentes, ya que ni siquiera el Consejo de Honor del Heroico Colegio Militar tiene competencia para determinar una baja del ejército, por lo que al no satisfacerse de alguna forma los preceptos constitucionales en cita procede declarar el amparo de la Justicia Federal a favor de la parte quejosa. - TERCERO.- El Acuerdo del General Secretario de la Defensa Nacional, mediante el cual el quejoso causa baja del Heroico Colegio Militar y del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos del que se hace referencia en el oficio número SA-2849 de fecha 26 de mayo de 1995, viola en forma directa los artículos 14 y 16 constitucionales, por que la responsable no acredita de ninguna forma la existencia de dicho Acuerdo, y tampoco acredita que se haya notificado al quejoso, y al desconocer el peticionario de amparo si el supuesto Acuerdo consta por escrito firmado por autoridad competente sólo es posible deducir que se trata de un acto inconstitucional ya que este Acuerdo TAMPOCO HA SIDO NOTIFICADO DE NINGUNA FORMA, por lo que no se ha tenido la mas mínima oportunidad de defensa frente al acto de privación



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE DEFENSA  
GUADALUPE, GUANAJUATO, AGOSTO 1995

*de que es objeto, ya que sin duda si el Director General de Educación Militar manifiesta en el oficio de referencia que se da de baja a Edgar Iván Colina Ramírez por Acuerdo del General Secretario de la Defensa Nacional, es jurídicamente indudable que debió de acreditar la existencia de dicho acuerdo, por que no es óbice para lo anterior que se trate de una institución castrense por que sobre ésta se encuentra el respeto al orden constitucional porque de permitir lo contrario toda la estructura del derecho positivo mexicano rompería su razón de ser y la cúspide del mismo que lo es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos perdería la esencia de su existencia, por lo tanto aún tratándose del General Secretario de la Defensa Nacional debe anteponer sus actos el respeto y obediencia absoluta a las garantías del gobernado, se entiende que esto en muchas ocasiones puede perjudicar estructuras administrativas internas, pero este es el precio de vivir en una democracia.--- En las condiciones anteriores tratándose de un Acuerdo del General Secretario de la Defensa Nacional que hasta el momento se desconoce si consta por escrito, solo es viable establecer que se trata de un acto de autoridad carente de fundamentación y motivación, mucho menos adecuación entre ambas y de un evidente acto de privación de derechos sin que haya precedido ningún medio legal de defensa y que solo se traduce en una*



114  
#10  
111

flagrante violación directa al orden constitucional en relación a los artículos 14 y 16 de la Carta Magna debiendo concederse el amparo y protección de la Justicia Federal.--- CUARTO.- La determinación o resolución dictada el día 22 de mayo de 1995, por el Consejo de Honor del Heroico Colegio Militar en contra del quejoso, es un acto que viola de manera directa los artículos 14 y 16 constitucionales por carecer de fundamentación y motivación por no citar los artículos aplicables al caso concreto y por no especificar los motivos y razones particulares por lo que se considera aplicable a la demandante de amparo y más aún se trata de una resolución proveniente de un procedimiento en el que nunca se dio a la quejosa ninguna oportunidad de defensa por lo que resulta del todo contraria al espíritu de los mandatos constitucionales en cita, por que para la existencia de una sanción se requiere la instauración, no de cualquier procedimiento, sino de aquél en el que se cumplan todas las formalidades esenciales que otorguen en plenitud la posibilidad de defensa a quién se pretende privar de un derecho y al no haberse cumplido esto en el procedimiento instaurado en el Consejo de Honor la determinación o resolución dictada por éste es del todo inconstitucional, máxime que se trata de un acto carente de fundamentación y motivación.--- QUINTO.- La orden para ser efectiva (sic) a favor del Erario



COPIA DE  
LA FOLIA N.  
1 DE AGUERO.

Nacional, la fianza otorgada por el quejoso, para garantizar su estancia en el Heroico Colegio Militar, es un acto que viola en forma directa los artículos 14 y 16 constitucionales, al carecer de toda fundamentación y motivación ya que la autoridad responsable no cita el precepto legal aplicable al caso concreto y no explica los motivos por los cuales considera que la conducta se acopla a la especie o caso concreto que hace valer la autoridad, reiterándose que debe de existir una debida adecuación entre ambas circunstancias por lo que sólo bastaría que se invocara algún artículo en forma lisa y llana, resultando de nueva cuenta que contra de este acto tampoco se ha cumplido ninguna formalidad esencial del procedimiento; ya que tratándose de un acto de privación, la demandante de garantías debió de haber sido oída en forma previa otorgándosele todas las posibilidades de defensa.--- SEXTO.- El artículo 170 fracción II, apartado D, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, es un acto violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que se trata de un artículo que faculta al Secretario de la Defensa Nacional para dar de baja al personal del Ejército sin fundar ni motivar sus resoluciones, más aún se trata de un artículo que no prevé ningún medio o recurso legal de defensa, cierto es que el artículo dice que en los casos de baja siempre será oído en defensa el afectado, pero ésta sola mención no satisface el





115  
112

mandato constitucional, por que es de explorada jurisprudencia que los recursos o medios legales de impugnación deben de estar expresamente establecidos en la ley o reglamento respectivo, para que el afectado pueda ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga dentro de un debido marco legal y no arbitrario, por que entender lo contrario implicaría que solo bastara la mención de referencia de que fuera oído en defensa del afectado frente al acto de privación, y quedara a la libre consideración de aquel que se sintiera lesionado en sus derechos para que a su libre criterio hiciera las manifestaciones del caso, y la autoridad entonces pudiera responder en los mismos términos, esto solo se traduce en una gran inseguridad jurídica por que no se sabría como podría ser revocada, modificada o confirmada una determinación o resolución de autoridad, por lo tanto al no establecerse en forma concreta y expresa el medio y procedimiento de impugnación correspondiente en el artículo de referencia ni en ninguna parte de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, debe declararse la inconstitucionalidad del acto reclamado.--- "LEY ORGANICA DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS. Artículo 170.- La baja es la separación definitiva de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea, del activo de dichas Instituciones y procederá por ministerio de ley o por acuerdo del Secretario de la Defensa Nacional en los siguientes



CORTE  
1 LA N  
GRAL D

casos:--- II. *Procede por Acuerdo del Secretario de la Defensa Nacional: D) Tratándose del personal de tropa y de los militares de la clase de auxiliares, además de las causas señaladas en los incisos que anteceden, podrán ser dados de baja por observar mala conducta, determinada por el Consejo de Honor de la Unidad o Dependencia a que pertenezcan, o por colocarse en situación de no poder cumplir con sus obligaciones militares, por causas no imputables a la Secretaría de la Defensa Nacional. En ambos casos siempre será oído en defensa del afectado".---* SEPTIMO.- *El Reglamento Interior del Heroico Colegio Militar y el Reglamento para la Organización y Funcionamiento de los Consejos de Honor y del Ejército, constituyen actos que violan de manera flagrante el artículo 14 constitucional al no establecer en ninguno de sus artículos ninguna forma de defensa previa a las resoluciones o determinaciones que dicten los Consejos de Honor en contra de los afectados, lo que viene a constituir una violación a las formalidades esenciales del procedimiento por permitir la privación de derechos sin la existencia de un juicio previo en el que se otorguen todas las posibilidades de defensa y donde se estableciera a través de qué medio de impugnación se podría modificar, confirmar o revocar sus determinaciones o resoluciones.---* "BAJA EN EL EJERCITO. Si se afirma que no es necesario un juicio en el que se declare la nulidad de la patente



116  
113

de un militar, porque no hay ley que así lo disponga, debe tenerse en cuenta que, **TRATANDOSE DE UN DERECHO**, que aun suponiéndolo de índole política, es justiciable ante los Tribunales como lo establece el artículo 4 de la Ordenanza, y el interesado no puede ser privado de él sin que previamente se siga en su contra el juicio respectivo, en el que se decidirá acerca de la nulidad de la patente, Y MIENTRAS ESE JUICIO NO SE SIGA Y EN EL SE PRONUNCIE SENTENCIA IRREVOCABLE, DEBE RESPETARSE EL DERECHO ADQUIRIDO POR EL INTERESADO, AL CONFERIRSELE UN GRADO EN EL EJERCITO NACIONAL".--- QUINTA EPOCA: TOMO XLI, PAG. 2465. SANCHEZ BENITEZ PABLO".



SECRETARÍA DE DEFENSA

**DECIMO.** En su sexto concepto de violación, la quejosa controvierte el artículo 170, fracción II, apartado D, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por violación a los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, en atención a las siguientes razones:

a) Porque dicho precepto legal faculta al Secretario de la Defensa Nacional para dar de baja al personal del Ejército sin fundar ni motivar sus resoluciones.

b) Porque si bien señala que el afectado será oído en defensa, como no prevé ningún medio o recurso legal de impugnación en el cual puedan ofrecerse pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, al no ser susceptible la resolución de la autoridad de ser revocada, modificada o

confirmada, el precepto reclamado viola la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional.

Con el propósito de examinar las argumentaciones propuestas, se atiende de nueva cuenta al contenido literal del artículo 170, fracción II, apartado D, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que dice:

*"Artículo 170.- La baja es la separación definitiva de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea, del activo de dichas instituciones y procederá por ministerio de Ley o por Acuerdo del Secretario de la Defensa Nacional en los siguientes casos:*

*...II. Procede por acuerdo del Secretario de la Defensa Nacional:*

*D. Tratándose del personal de Tropa y de los militares de la clase de Auxiliares, además de las causas señaladas en los incisos que anteceden, podrán ser dados de baja por observar una mala conducta, determinada por el Consejo de Honor de la Unidad o Dependencia a que pertenezcan, o por colocarse en situación de no poder cumplir con sus obligaciones militares, por causas no imputables a la Secretaría de la Defensa Nacional. En ambos casos, siempre será oído en defensa el afectado."*

Con relación al primer argumento hecho valer, se tiene presente que la garantía de fundamentación y





117  
#3  
114

motivación prevista en el artículo 16 de la Constitución, consiste en que las autoridades administrativas, en las resoluciones que emitan, deben expresar con precisión, los preceptos legales aplicables al caso, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en consideración para su emisión, debiendo existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, para la configuración de las hipótesis normativas.

Ahora bien, de la lectura del precepto legal impugnado, contrariamente a lo que sostiene la parte quejosa, en ninguna parte de su texto se advierte que exima al Titular de la Secretaría de la Defensa Nacional de la obligación constitucional de fundar y motivar la orden de baja emitida con base en las facultades que le concede dicho numeral, hecho que patentiza lo infundado del concepto de violación a examen.

A mayor abundamiento, la circunstancia de que en el precepto legal impugnado no se reproduzca el contenido del artículo 16 constitucional en cuanto a la obligación de fundar y motivar la orden de baja relativa, tampoco lleva a declarar su inconstitucionalidad, porque no es necesario que tal requisito deba repetirse en las leyes secundarias, tal y como lo sostuvo el Pleno de este Alto Tribunal en la tesis jurisprudencial consultable en las páginas 148 y 149 del Tomo I, de la Compilación de 1917 a 1995, cuyo texto es como sigue:

"FUNDAMENTACION Y MOTIVACION  
CONTENIDAS EN EL ARTICULO 16

CONSTITUCIONAL. NO NECESITAN REPETIRSE EN LA LEY SECUNDARIA (ARTICULO 151 (sic) DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION). Un precepto no viola el artículo 16 constitucional por el hecho de no establecer que los actos de molestia deben constar en mandamiento escrito de autoridad competente y de que deben estar fundados y motivados. Estos requisitos están contenidos en el artículo 16 constitucional y no necesitan repetirse en la ley secundaria para que ésta sea constitucional. La conclusión anterior es lógica puesto que la circunstancia de que no exista en la ley aplicable precepto alguno que imponga a la autoridad responsable la obligación de fundar y motivar su mandamiento de esos requisitos, en atención a que, en ausencia de norma específica contenida en la ley del acto, se halla el mandamiento imperativo del artículo 16 de la Constitución Política, que protege dicha garantía, sin excepción, a favor de todos los gobernados. En estas condiciones, el artículo 41 (sic) del Código Fiscal de la Federación, que faculta a las autoridades hacendarias para emitir mandamientos de ejecución y requerimientos de pago en contra de los particulares, no resulta violatorio de la Constitución por el hecho de no reproducir los requisitos constitucionales de motivación y fundamentación."

ESTADO DE JALISCO  
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO  
SUPLENTE DE  
JEFATURA DE GOBIERNO



118  
114  
115

Respecto del diverso razonamiento que se hace valer, consistente en que el precepto legal reclamado es inconstitucional por no prever un recurso o medio legal de defensa para controvertir la resolución en que se determine la baja de un miembro del instituto armado, con el propósito de examinar este argumento, debe recordarse que este Alto Tribunal ha estimado que la garantía de audiencia prevista en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución, en tratándose de procedimientos ante autoridades administrativas, el otorgamiento al posible afectado de la oportunidad de alegar y probar lo que a su derecho convenga, en algunos casos puede ser previa y, en otros, posterior.

En consecuencia, las leyes que regulen los procedimientos administrativos, en los cuales pueda llegar a privarse al gobernado de alguno de los bienes jurídicamente tutelados por el artículo 14 constitucional, pueden prever la oportunidad defensiva del gobernado previamente al acto de privación, sin embargo, no debe confundirse esta posibilidad previa de defensa con la impugnabilidad del acto privativo mediante el establecimiento de recursos consignados en la ley reguladora del procedimiento relativo, dado que la previsión de dos o más instancias no es una exigencia requerida para el debido respeto de las formalidades esenciales del procedimiento a que se refiere la garantía de audiencia, razón por la cual resulta infundado el concepto de violación hecho valer sobre el particular.

Así lo ha sostenido este Tribunal Pleno en la tesis publicada en la página treinta y dos de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación correspondiente a mayo



CORTE  
LA NACI  
DE JUDICIOS

de mil novecientos noventa y dos, aplicable por analogía al procedimiento sancionador castrense que se examina, que dice:

*"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. NO LAS VIOLA EL ARTICULO 49 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE NUEVO LEON.- El precepto citado no viola las formalidades esenciales del procedimiento en el juicio civil, que como garantía individual consagra el artículo 14 constitucional, por no otorgar al juzgador de segunda instancia la facultad dque establece a favor del de primera instancia para decretar la práctica de diligencias y la aportación o ampliación de pruebas, con independencia de las ofrecidas y rendidas por las partes. En efecto, si las formalidades esenciales del procedimiento que exige el texto constitucional para el debido respeto de la garantía de audiencia previa al acto privativo, son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa del gobernado, se sigue que el precepto secundario no las infringe porque durante el juicio de primera instancia las partes tienen la posibilidad de ofrecer, aportar y rendir las pruebas que estimen pertinentes y convenientes, de tal suerte que no les produce indefensión el que al tribunal de alzada no se le faculte para recabar oficiosamente nuevas pruebas, máxime si por la razón apuntada, el establecimiento de dos o más instancias no es una*

SECRETARIA GER  
JEFATURA DE  
SUPLENTE MA





119  
116

*exigencia para el debido respeto a las formalidades esenciales del procedimiento dentro de la garantía de audiencia."*

En las condiciones descritas, al resultar infundados los conceptos de violación que sostienen la inconstitucionalidad del artículo 170, fracción II, apartado D, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, procede negar el amparo solicitado respecto de dicho precepto.

DECIMO PRIMERO.- En la demanda de amparo presentada por el quejoso se señalan como actos reclamados el Reglamento Interior del Heroico Colegio Militar y el Reglamento para la Organización y Funcionamiento de los Consejos de Honor en el Ejército.

Es importante precisar que la competencia legal para conocer de un amparo en revisión en que subsista en el recurso el problema de inconstitucionalidad de un reglamento expedido por el Presidente de la República, de acuerdo con la facultad prevista en el artículo 89, fracción I, de la Constitución federal, corresponde originariamente a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, la relación causal existente entre los reglamentos descritos con la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, derivada del procedimiento militar instaurado en contra del quejoso, así como la necesidad procesal de evitar una excesiva dilación en resolver el



CORTE  
LA N  
AL DE

presente asunto al remitirlo a la Sala correspondiente, procede ejercer la facultad de atracción prevista en el artículo 10, fracción II, inciso b), de la Ley que rige a este Alto Tribunal, para resolver sobre la constitucionalidad del Reglamento Interior del Heroico Colegio Militar y del Reglamento para la Organización y Funcionamiento de los Consejos de Honor en el Ejército.

Sentado lo anterior, conviene resaltar que el quejoso sostiene en su séptimo concepto de violación que los reglamentos impugnados resultan violatorios de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, al no prever ninguna forma de defensa previa al dictado de la resolución por los Consejos de Honor en contra de los afectados, ni establecer algún medio de defensa o recurso para impugnar dicha resolución, que permita su revocación, modificación o confirmación.

En primer lugar, se estudian los anteriores conceptos de violación en relación con el Reglamento para la Organización y Funcionamiento de los Consejos de Honor en el Ejército, para lo cual, no obstante que fueron transcritos en el considerando séptimo, para una mayor claridad en la resolución, conviene atender nuevamente al contenido de los artículos 16 al 21 de dicho ordenamiento, que regulan el procedimiento que se sigue ante los referidos Consejos militares.

*"Art. 16.- Cuando el Consejo se reúna para juzgar a algún acusado, se procederá en la forma siguiente:*



CORTE  
FEDERAL  
DE JUSTICIA

120  
116  
117

Reunido el Consejo y estando presente el acusado, el Presidente le tomará sus generales, lo exhortará a producirse con verdad y le manifestará que tiene derecho a nombrar defensor a alguno de los Jefes u Oficiales de la Corporación, Dependencia, Guarnición o Unidad a que pertenezca y que se encuentre presente en la audiencia, con exclusión de los miembros del Consejo. Si el acusado no nombrare defensor, el Presidente lo designará.

Art. 17.- A continuación le hará conocer los cargos que se le imputan y si el Consejo se ha reunido por orden superior o por disposición del propio Presidente, haciendo comparecer y declarar a los peritos y testigos que fuere necesario.

Art. 18.- La voz de la acusación la llevará un Jefe u Oficial nombrado por el Presidente del Consejo.

Art. 19.- Después hará uso de la palabra la defensa, para que exponga cuanto crea favorable al acusado. Una vez que hubiere terminado de hablar el defensor, el Presidente manifestará al acusado que puede usar de la palabra para hacer su descargo, sin más limitación que el respeto a la ley y a las autoridades.

Art. 20.- Terminada la audiencia, el Presidente procederá a recoger la votación, entre los miembros del Consejo, para decidir si el acusado es o no culpable. Dicha votación deberá

*hacerse principiando por el de menor categoría o antigüedad.*

*Art. 21.- Si el resultado de la votación fuere condenatorio, se procederá a deliberar sobre el correctivo disciplinario que deba imponerse, con los límites prevenidos en el Capítulo III.*

De los preceptos reglamentarios transcritos, especialmente del numeral 19, se aprecia, contrariamente a lo sostenido por el quejoso, que los procedimientos castrenses ante el Consejo de Honor previstos por dichos artículos, respetan las formalidades esenciales con que debe contar todo procedimiento, mismas a que alude el artículo 14 constitucional por las siguientes razones:

a) Cuenta con una etapa primaria en la cual el afectado conoce, por medio del acusador, los hechos que se le imputan y, por ende, la materia sobre la cual versará el procedimiento (artículos 17 y 18);

b) Prevé la posibilidad de que el acusado exponga, sin más limitación que el respeto a las normas y autoridades militares, por sí y a través de su defensor, lo que a su derecho convenga para demostrar sus argumentos de descargo, situación que revela que dichos sujetos cuentan con la oportunidad de ofrecer los medios de convicción que estimen pertinentes para comprobar sus aseveraciones (artículo 19);

c) Por último, existe la etapa en la cual el órgano colegiado resolutor, tras deliberar respecto de los argumentos expuestos por la parte acusadora y la defensa, decide sobre la existencia o inexistencia de la culpabilidad





atribuida al acusado, imponiendo en su caso, la medida disciplinaria que a su juicio corresponda.

En las citadas condiciones, como el procedimiento previsto en el Reglamento para la Organización y Funcionamiento de los Consejos de Honor en el Ejército, contempla las etapas que requieren las formalidades esenciales de todo procedimiento, debe concluirse que tal ordenamiento no resulta violatorio de la garantía de audiencia previa, razón por la que resulta infundado el concepto de violación hecho valer sobre el particular.

Robustece la anterior determinación el contenido de las tesis de jurisprudencia y la relacionada a la de jurisprudencia diecinueve, visibles en las páginas 133 a 134 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, y en la página 42, Primera Parte, de la Compilación de 1917 a 1988, cuyos textos son los siguientes:

*"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones,*

la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar, y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."

"AUDIENCIA, GARANTIA DE REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS LEYES PROCESALES EN RESPETO A LA.- De acuerdo con el espíritu que anima el artículo 14 constitucional, a fin de que la ley que establece un procedimiento administrativo, satisfaga la garantía de audiencia, debe darse oportunidad a los afectados para que sean oídos en defensa, antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos, con la única condición de que se respeten las formalidades esenciales de todo procedimiento. Este debe contener etapas procesales, las que pueden reducirse a cuatro; una etapa primaria en la cual se entere al afectado sobre la materia que versará el propio procedimiento que se traduce siempre en un acto de notificación, que tiene por





122  
H8  
119

finalidad que conozca de la existencia del procedimiento mismo y dejarlo en aptitud de preparar su defensa, una segunda, que es la relativa a la dilación probatoria, en que pueda aportar los medios convictivos que estime pertinentes, la subsecuente es la relativa a los alegatos en que se dé oportunidad de exponer las razones y consideraciones legales correspondientes y, por último debe dictarse resolución que decida sobre el asunto".

Por lo que hace al diverso argumento en que se sostiene que el Reglamento para la Organización y Funcionamiento de los Consejos de Honor en el Ejército es violatorio de la garantía de audiencia por no establecer un recurso o medio de defensa ordinario que posibilite la revocación, modificación o confirmación de las resoluciones dictadas por los Consejos de Honor, debe decirse que tal concepto de violación resulta infundado, con base en los razonamientos y criterio expuestos en el considerando precedente, en el que se estableció que la previsión de dos o más instancias no es una exigencia requerida para el debido respeto de las formalidades esenciales del procedimiento a que se refiere la garantía de audiencia, motivo por el cual procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita respecto del mencionado Reglamento.

Por otra parte, para atender los conceptos de violación que sostienen la inconstitucionalidad del Reglamento Interior del Heroico Colegio Militar, conviene destacar que dicho ordenamiento se encuentra dividido en



CORTE DE  
NACIONAL  
Ejército

nueve Títulos, con sus correspondientes Capítulos, en cuyo articulado se establecen los objetivos, organización, personal y funciones de los órganos que estructuran al citado Colegio, así como las normas relativas a la admisión, enseñanza, inasistencias, bajas, reingresos, reconocimientos académicos, disciplina y garantía de la permanencia de los alumnos en dicha institución.

Ahora bien, los únicos preceptos que guardan relación con el asunto a estudio, por haberse actualizado sus hipótesis normativas durante el procedimiento instaurado en contra del quejoso, así como en la resolución que dictaminó que procedía decretar su baja del Heroico Colegio Militar, son los siguientes:

*"ARTICULO 10.- El Director del Heroico Colegio Militar, tiene las mismas obligaciones y atribuciones correspondientes a un comandante de tropas, de conformidad con lo estipulado en las leyes y reglamentos militares y además las siguientes:*

*...VII. Convocar al Consejo de Honor...*

*ARTICULO 73.- Son causales de baja del planter para el personal en instrucción, las siguientes:*

*...VII. Por encontrarse en alguna de las causales de baja establecidas en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.*

*VIII. Acumular 500 puntos de demérito durante el ciclo lectivo, previa determinación de mala conducta dictada por el Consejo de Honor...*





123

#19  
120

ARTICULO 98.- Los civiles y el personal de tropa que causen alta en el plantel como Cadetes, otorgarán un depósito en efectivo cuyo monto fijará la Secretaría de la Defensa Nacional...

ARTICULO 100.- Cuando el cadete cause baja del plantel antes de terminar sus estudios por causas imputables al propio cadete, el importe del depósito se hará efectivo a favor del Erario Nacional..."

Los preceptos transcritos, en relación con el contenido normativo del Reglamento impugnado, evidencian que su objeto de regulación es el establecimiento de atribuciones de las estructuras orgánicas y personal que conforma la institución, así como las reglas sustantivas relacionadas con el ingreso y permanencia de sus cadetes, motivo por el cual, en dicho cuerpo reglamentario no aparece normado el procedimiento tendiente a constatar conductas que merezcan la aplicación de una sanción disciplinaria del orden militar, sino que el procedimiento respectivo se contempla en el Reglamento para la Organización y Funcionamiento de los Consejos de Honor en el Ejército, cuya constitucionalidad se ha corroborado en párrafos precedentes.

En las relatadas condiciones, como el Reglamento Interior del Heroico Colegio Militar sólo establece las normas sustantivas que rigen a dicha institución, entre las cuales se encuentran aquéllas que prevén las causales de baja de los alumnos, mas no los procedimientos tendientes a verificar tales situaciones, mismos que se encuentran



CORTE  
LA NAC  
11 DE AGOSTO

previstos en un ordenamiento diverso, deben considerarse inoperantes los argumentos que aducen la inconstitucionalidad del primero por violación a la garantía de audiencia, toda vez que un cuerpo normativo del orden sustantivo no puede trasgredir el derecho público subjetivo que tutela específicamente la defensa del gobernado durante los procedimientos administrativos que puedan culminar con la emisión de actos de privación, porque al no ser éstos su objeto de regulación, no es jurídicamente posible el examen de su constitucionalidad bajo ese aspecto.

Por lo dicho en el presente considerando, al resultar infundados e inoperantes los conceptos de violación propuestos, procede negar el amparo que se solicita en contra del Reglamento Interior del Heroico Colegio Militar y el Reglamento para la Organización y Funcionamiento de los Consejos de Honor en el Ejército.

DECIMO SEGUNDO.- Respecto de los conceptos de violación primero, segundo, tercero y quinto que controvierten los actos consistentes en el acuerdo y orden de baja del Heroico Colegio Militar en perjuicio del quejoso y la orden para hacer efectiva la fianza de éste para garantizar su estancia en dicha institución, como el conocimiento de estas cuestiones de legalidad no corresponde a esta Suprema Corte, sino al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno, del Primer Circuito, con residencia en el Distrito Federal, con apoyo en lo que ordena el artículo 92 de la Ley de Amparo, se reserva jurisdicción a dicho Tribunal para que resuelva lo que corresponda.



124  
120  
121

En consecuencia, por todo lo expuesto en este y en los anteriores considerandos, debe modificarse la sentencia recurrida, en la materia competencia de esta Suprema Corte, quedar firme el sobreseimiento decretado por la Juez de Distrito en relación con la autoridad precisada en el considerando tercero de la resolución que se revisa, confirmar el sobreseimiento respecto del Director del Heroico Colegio Militar y actos que se le atribuyen, sobreseer en el juicio respecto de los actos y autoridades señalados en el considerando séptimo de esta resolución, negar el amparo respecto de la Ley y Reglamentos impugnados y, finalmente, reservar al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno, del Primer Circuito, con residencia en el Distrito Federal, el conocimiento de las cuestiones de legalidad que son de su competencia.

Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 91 y relativos de la Ley de Amparo, se resuelve:

**PRIMERO.-** En la materia competencia de esta Suprema Corte se modifica la sentencia recurrida.

**SEGUNDO.-** Queda firme el sobreseimiento decretado por la Juez de Distrito en relación con la autoridad precisada en el considerando tercero de la resolución que se revisa.

**TERCERO.-** Se sobresee en el juicio respecto de los actos y autoridades precisados en los considerandos quinto y séptimo de la presente resolución.

**CUARTO.-** La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Edgar Iván Colina Ramírez contra la expedición y

RTE DE  
NACIONAL  
DE ACUERDOS.

promulgación del artículo 170, fracción II, apartado D, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, del Reglamento Interior del Heroico Colegio Militar y del Reglamento para la Organización y Funcionamiento de los Consejos de Honor en el Ejército.

QUINTO.- Por lo que toca al análisis de los conceptos de violación primero, segundo, tercero y quinto de la demanda, se reserva jurisdicción al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno, del Primer Circuito, con residencia en el Distrito Federal.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución y copia certificada del escrito de expresión de agravios, remítanse los autos del juicio y toca al Tribunal Colegiado que se mencionó en el punto anterior dando aviso de ello a la Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno, por unanimidad de once votos de los señores Ministros: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María del Carmen Sánchez Cordero, Juan N. Silva Meza y Presidente José Vicente Aguinaco Alemán.

SUPREMA  
CORTA DE JUSTICIA  
SECRETARIA DE JUSTICIA





125  
127  
127

Firman el Ministro Presidente y el Ministro Ponente, con el Secretario General de Acuerdos que da fe.

EL PRESIDENTE:

MINISTRO JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMAN.

PONENTE:

MINISTRO MARIANO AZUELA GUITRON.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS:

LICENCIADO JOSÉ JAVIER AGUILAR DOMINGUEZ.



CORTE  
DE LA NAC  
IONAL DE ACUERDOS

ESTA FOJA CORRESPONDE AL AMPARO EN REVISION 250/96, PROMOVIDO POR EDGAR IVAN COLINA RAMIREZ, EL CUAL SE RESOLVIO EL DIA CUATRO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.

HSC/egph.

RECIBIDO DE LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS  
PARA NOTIFICACION EL 20 MAR. 1997 S

En 24 MAR. 1997 ... y Por medio de lista, se  
notificó la resolución anterior a las partes y al Ministerio Público  
Federal. Consta. S

